

Marzo 26 de 2020 Palmira Valle.

Secretaría Sala Penal

Glorio

2020SEP 4 11:09AM Rbdo

49 Fol

Señores:  
Juzgado Constitucional de Reparto de Palmira ó  
a quien corresponda.

E. S. H. D

Referencia: Acción de Tutela

Accionante: Yuber Burbano Quinaya

Accionados: Tribunal Superior del Dis-

trito Judicial de Buga,  
Juzgado Primero de Ejecu-  
ción de Penas y Medidas  
de Seguridad de Palmira  
y el procurador judicial  
322 penal I de Palmira.

Cordial Saludo:

Yuber Burbano Quinaya identificado como aparece  
al pie de mi correspondiente firma, recluido ac-  
tualmente en el patio nº 5 del EPAMSCAS de Palmira  
Valle, amparado en el artículo 86 de la Constitución  
Nacional y demás normas concordantes del mis-  
mo, presento acción de tutela en contra del tri-  
bunal Superior del distrito judicial de Buga,  
el juzgado Primero de Ejecución de Penas y Me-  
didas de Seguridad de Palmira y el Procurador  
Judicial 322 Penal I de Palmira para que se

me amparen y tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad y a la dignidad humana vulnerados por las partes accionadas en ésta de acuerdo a los siguientes:

## HECHOS

Primero: Por hechos ocurridos el día 06 de julio del año 2004 me encuentro descontando pena privativa de la libertad de 31 años de prisión por la conducta punible de secuestro extorsivo agravado a título de coautor, cuya pena fue impuesta por el juzgado tercero penal del circuito especializado de Neiva.

Segundo: Por los hechos materia de investigación y condena fui capturado el día 18 de enero de 2005. En la actualidad la pena me la está vigilando el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Palmira.

Tercero: Por cumplir los requisitos objetivos y subjetivos que consagra el artículo 64 de la ley 599 de 2000 modificado por el artículo 30 de la ley 1709 de 2014, solicite al a quo que vigile mi pena el subrogado penal de libertad condicional, la cual mediante auto interlocutorio n° 1747 del 22 de agosto de 2019 me fue despachada favorablemente bajo pago de fianza de

tres salariales mínimos mensuales vigentes. En dicha oportunidad no alcanza a gozar de mi libertad por no tener los recursos económicos para pagar la fianza.

Cuarto: El procurador Judicial 322 penal I de Pal. mira vale presente recurso de reposición contra el auto interlocutorio n° 1747 que me había otorgado la libertad condicional argumentando que yo por expresa prohibición de los artículos 11 de la ley 133 de 2002 y 26 de la ley 1121 de 2006 no era derecho a la libertad condicional porque por el delito en que había sido condenado "Yuber Burbano Quinaya se encuentra excluido de beneficios.

Quinto: mediante auto interlocutorio n° 2008 del 01 de octubre de 2019 el señor juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Palmira resolvió revocar la concesión de mi libertad condicional argumentando lo siguiente: "el perado no es derecho a ningún beneficio administrativo, como tampoco a ningún mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena, por haber sido declarado culpable, entre otras, por el delito de secuestro extorsivo". De esta manera, el señor juez acoge lo argumentado por el agente del ministerio público y revoca mi libertad condicional.

sexto: Contra la decisión del señor juez de revocar mi libertad condicional; y al considerar que por principio de legalidad y favorabilidad yo era derecho a dicho subrogado penal, el día 10 de octubre de 2019 presente y sustente recurso de reposición con subsidio de apelación los cuales fueron resueltos negativamente por las partes así: mediante A.I. n° 182 del 28 de enero de 2020 el juzgado primero de ejecución de penas decide no reponer el auto interlocutorio n° 2008 y en su defecto da trámite al recurso de apelación ante el tribunal de Buga, y, mediante auto consecutivo P-001 del 09 de marzo de 2020 el tribunal superior del distrito judicial de Buga decide "CONFIRMAR el auto n° 2.008 del 1 de octubre de 2019, que resolvió reponer para revocar el auto interlocutorio número 1747 del 22 de agosto de 2019," mediante el cual se me había otorgado la libertad condicional; manifestandome, que contra esa providencia no procedía recurso alguno. lo que a la luz del derecho procede esta acción de tutela.

Septimo: Mis argumentaciones han sido basadas en lo siguiente:

- a) Que en mi contra no puede aplicarse el artículo 11 de la ley 733 de 2002 porque el mismo fue derogado tácitamente por el artículo

5 de la ley 890 de 2007.

b) Que tampoco debe aplicarse la prohibición consagrada en el artículo 26 de la ley 1121 de 2006 toda vez que cuando fue expedida la ley 1121 de 2006 yo ya me encontraba capturado.

c) Y, que por favorabilidad se me debe aplicar lo establecido en el artículo 64 de la ley 599 de 2000 con las modificaciones hechas por el artículo 30 de la ley 1709 de 2014.

### DERECHOS VULNERADOS.

Constitucionalmente Considero que se me está vulnerando derechos fundamentales al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, a la libertad y a la dignidad humana establecida en el artículo 1º de la carta magna por las siguientes consideraciones:

### CASO CONCRETO:

Por cumplir los requisitos consagrados en el artículo 64 de la ley 599 de 2000 modificado por la ley 1709 en su artículo 30, que establece que el juez previa valoración de la conducta punible conceda la libertad condicional al condenado cuando haya cumplido las tres quintas  $3/5$  par-

tes de la pena imprevista y se cumpla con otros requisitos de carácter subjetivos. En vista a ello, e invocando el principio de favorabilidad que consagra la Constitución nacional en su artículo 29 "En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o favorable." Y, el delegado del ministerio público presentó recurso de reposición contra el auto que en primera medida me había otorgado la libertad condicional argumentando que por expresa prohibición del artículo 11 de la ley 733 de 2002 y 26 de la ley 1121 de 2006 el penado no era derecho a ningún beneficio administrativo y subrogado penal, solicitando revocar dicho auto que me había concedido la libertad condicional. dicha reposición fue acogida por el señor juez y revocó el auto.

Dicha decisión fue apelada en su momento tal como se puede comprobar en las pruebas que en ésta aportó, la cual fue despachada desfavorable por el tribunal superior de Buga, manifestando textualmente lo siguiente: "sin embargo, dado que los hechos que motivaron la condena fueron cometidos el 6 de julio de 2004 y que desde el 01 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006 el legislador no contempló ningún tipo de exclusión frente al secuestro extorsivo, se observa sin mayor esfuerzo que la norma

llamada a regular el presente caso es el artículo 5 original de la ley 890 de 2004, que no contemplaba ningún tipo de exclusión y exigía examinar (i) el cumplimiento de las dos terceras ( $\frac{2}{3}$ ) partes de la pena privativa de la libertad (ii) la buena conducta del interno en el establecimiento carcelario y (iii) la valoración de la gravedad de la conducta punible."

Frente a ello, y al encontrarse varias normas que regulan la concesión de la libertad condicional esto es: el artículo 5 de la ley 890 de 2004 y artículo 30 de la ley 1709 de 2014 que modificó el artículo 64 de la ley 599 de 2000, la primera que establece la libertad condicional al cumplir las dos terceras  $\frac{2}{3}$  partes de la pena y la segunda que concede la libertad al cumplir las tres quintas  $\frac{3}{5}$  partes de la pena impuesta; honorables magistrados, considero que en mi caso y por mandato del principio de favorabilidad y en garantía de mi debido proceso se me debe conceder la libertad con lo que establece el artículo 64 de la ley 599 de 2000 modificado por el artículo 30 de la ley 1709 de 2014, o sea con las  $\frac{3}{5}$  partes de mi pena por ser la más favorable y no el artículo 5 de la ley 890 de 2004 como lo falló el Tribunal Superior del distrito judicial de Buga.

Es clara entonces la norma cuando plantea que en materia penal la norma restrictiva o favorable se aplicará al imputado cuando ella sea más favorable a los intereses del imputado.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamento de derecho lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en su resolución 2591 de 1.991 y demás normas concordantes de la misma.

## PETICIÓN CONCRETA

Por los hechos narrados y expuestos y con el respaldo de las pruebas que aportó en ésta, solicito a los honorables magistrados de la sala de tutela lo siguiente:

TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales del debido proceso, la libertad y la dignidad humana; y, como consecuencia de lo anterior:

Primero: Revocar el auto interlocutorio n.º 2008 del 1º de octubre de 2019 del



Jurado Primero de Ejecución de Penas y medidas de seguridad de Palmira y el auto consecutivo: P-001 aprobado según acta N° 59 el 04 de marzo de 2020 por el Tribunal Superior del distrito judicial de Buga.

Segundo: Por mandato del principio de favorabilidad y por garantía de mi debido proceso conceder a mi favor la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de la ley 599 de 2000 modificados por el artículo 30 de la ley 1709 de 2014.

## PRUEBAS.

### Documentales:

- \* Auto interlocutorio N° 1747 donde se me concedió la libertad condicional.
- \* Auto interlocutorio N° 2008 donde se revoca el auto interlocutorio N° 1747
- \* Copia de recurso de reposición y apelación interpuesto en contra del A.I N° 2008.
- \* Auto interlocutorio N° 182 donde se me re-

ponde negativamente el recurso de reposición.

\* Respuesta por parte del Tribunal Superior de Buga a recurso de Apelación.

### JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he interpuesto ninguna otra acción por los hechos y derechos acá vulnerados.

### NOTIFICACIÓN

Recibire notificación en el patio n° 5 del centro penitenciario y Carcelario de Palmira Valle.

Atentamente:



Yuber Burbano Quinaza

C. 12.123.648

TJ 21656

Patio 5

EPAMSCAJ Palmira.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL**



**JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA**

Palmira, Valle del Cauca, veintidós (22) de agosto de 2019

**OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO**

Se decide la petición de libertad condicional, Incoada a favor del condenado **YUBER BURBANO QUINAYA**, recluso en el Establecimiento Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Palmira -EPAMSCAS- de esta ciudad.

**ANTECEDENTES**

**YUBER BURBANO QUINAYA**, identificado con número de cedula 12.123.648 DE Neiva Huila, fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva, Huila, el 25 de septiembre de 2006, por el delito de secuestro extorsivo agravado, a la pena principal de 31 años de prisión, multa de 16.250 S.M.M.L.V. y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el termino de 20 años, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria<sup>1</sup>, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Neiva, Huila, el 2 de abril de 2008<sup>2</sup>, resolviendo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de agosto de 2009, inadmitir la demanda interpuesta por la defensa<sup>3</sup>

El condenado esta privado de la libertad desde el 18 de Enero de 2005<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Folio 6 a 59 cuaderno 1.

<sup>2</sup> Folio 60 a 84 cuaderno 1.

<sup>3</sup> Folio 85 a 119 cuaderno 1.

<sup>4</sup> Folio 27 cuaderno 1.

Radicado 41001-3107-003-2005-00021-00 (NI 6279)  
Sentenciado **Yuber Burbano Quinaya**  
A.I. 1747

Detención Física	14 años	07 meses	04 días
Redención N° 1140 <sup>5</sup>	01 año	01 mes	23 días
Redención N° 420 <sup>6</sup>		01 mes	28 días
Redención N° 1185 <sup>7</sup>		01 mes	18 días
Redención N° 224 <sup>8</sup>		02 mes	01 días
Redención N° 497 <sup>9</sup>		01 mes	
Redención N° 514 <sup>10</sup>		01 mes	02 días
Redención N° 805 <sup>11</sup>		01 mes	
Redención N° 1031 <sup>12</sup>			29 días
Redención N° 621 <sup>13</sup>		01 mes	27 días
Redención N° 414 <sup>14</sup>		01 mes	07 días
Redención N° 1524 <sup>15</sup>			20 días
Redención N° 877 <sup>16</sup>		01 mes	29 días
Redención N° 1838 <sup>17</sup>		01 mes	05 días
Redención N° 1887 <sup>18</sup>		05 meses	13 días
Redención N° 2391 <sup>19</sup>		02 meses	09 días
Redención N° 507 <sup>20</sup>		01 mes	01 día
Redención N° 793 <sup>21</sup>		03 meses	04 días
Redención N° 1879 <sup>22</sup>		01 mes	21 días
Redención N° 2118 <sup>23</sup>		01 mes	07 días
Redención N° 695 <sup>24</sup>		01 mes	23 días
Redención N° 1262 <sup>25</sup>		01 mes	20 días
Redención N° 1724 <sup>26</sup>			13 días

---

<b>PARA UN TOTAL</b>	<b>18 AÑOS</b>	<b>08 MESES</b>	<b>04 DIAS</b>
----------------------	----------------	-----------------	----------------

<sup>5</sup> Folio 198 a 201 cuaderno 1.

<sup>6</sup> Folio 31 cuaderno 2

<sup>7</sup> Folio 76 cuaderno 2

<sup>8</sup> Folio 106 cuaderno 2

<sup>9</sup> Folio 140 cuaderno 2

<sup>10</sup> Folio 141 cuaderno 2

<sup>11</sup> Folio 160 cuaderno 2

<sup>12</sup> Folio 193 cuaderno 2

<sup>13</sup> Folio 62 y 63 cuaderno 3

<sup>14</sup> Folio 62 y 63 cuaderno 3

<sup>15</sup> Folio 264 cuaderno 3

<sup>16</sup> Folio 80 a 84 cuaderno 5

<sup>17</sup> Folio 79y 80 cuaderno 6

<sup>18</sup> Folio 153 y 154 cuaderno 6

<sup>19</sup> Folio 188 y 189 cuaderno 6

<sup>20</sup> Folio 230 y 231 cuaderno 6

<sup>21</sup> Folio 157 y 158 cuaderno 7

<sup>22</sup> Folio 236 y 237 cuaderno 7

<sup>23</sup> Folio 245 y 246 cuaderno 7

<sup>24</sup> Folio 284 y 285 cuaderno 7

<sup>25</sup> Folio 18 cuaderno 8

<sup>26</sup> Folio 83 y 84 cuaderno 8

Radicado 41001-3107-003-2005-00021-00 (NI 6279)  
Sentenciado **Yuber Burbano Quinaya**  
A.I. 1747

**y 26 días**), conforme a las obligaciones contenidas en tal norma y a la cancelación de *caución* prendaria que garantice el cumplimiento de tales obligaciones, la cual el despacho fija en tres (3) salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, que debe ser depositada a órdenes de este despacho en la cuenta de depósitos judiciales que se lleva en el Banco Caja Agraria de esta ciudad.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira Valle, en ejercicio de sus atribuciones legales,

### **RESUELVE**

**PRIMERO. CONCEDER** al penado **YUBER BURBANO QUINAYAS** identificado con cédula de ciudadanía número 12.123.648 expedida en Neiva Huila Valle, **LA LIBERTAD CONDICIONAL** por lo expuesto en el presente proveído, debiendo suscribir diligencia de compromiso conforme a las obligaciones contenidas en el art. 65 del Código Penal, y garantizar el cumplimiento de estas mediante el otorgamiento de *caución* prendaria en cuantía de tres (3) salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes a órdenes de este despacho en la respectiva cuenta de depósitos judiciales, con un periodo de prueba igual al tiempo que le falte por cumplir para la totalidad de la pena impuesta (**12 años 3 meses y 26 días**).

**SEGUNDO.** Contra esta providencia proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación, dentro de los tres días siguientes a su notificación.

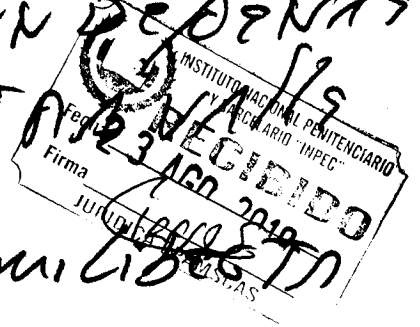
### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

La Juez,

**CONSTANZA GRAJALES GONZALEZ**



Ayuntamiento de San Juan de los Rios  
Jesús de los Rios de la Sierra  
y municipio de San Juan de los Rios  
Agosto 22 de 2014



A.N. 1747 NOTIFICACIÓN SOBRE MILIBERTAD

DOCTOR COSTANZA GONZALEZ GONZALEZ

me deso o ante su nombre de deso o  
con el fin de pedirle de su nombre  
colaboración

115050 NOMBRE LEPIDE DE TE DOCUMENTO  
De que por favor me des de su nombre  
NOTA YO NUNCA SENTI YO YA  
QUYO ME ENCUENTRO INSOLVENCIA  
ECONOMICA Y ME ENCUENTRO MUY  
MUY COMPLICADO QUE SI DO  
EL SUBSISTENTE YO ME ENCUENTRO ESTANDO  
EN MILIBERTAD YO ME ENCUENTRO  
Y LES PAGO 20 MIL PESOS MENSUALES  
ABONANDO LOS 3 SALARIOS MINIMOS POR  
QUE EN MILIBERTAD Y QUE ES FORTO  
MUCHO

AT. JUB 20 BUD LINO QUINA V  
CC 12 193 648  
T D 216 56  
PABLO A  
PATIOS

SEPTIEMBRE 18 DE 2019 CANCELACIÓN  
REF. DEFECHO DE DEFICIÓN. NOT 25 CLAN  
CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO  
DE LOS JOSEFOS DE EJECUCIÓN DE <sup>WELIS</sup>  
PENSY MICH de 25 CLAN  
PALMIA VALL DEL CAUCA

SEPTIEMBRE 10 DE 2019  
OFICIO: N° 5453  
REF: NUMERO DE CINTA NO. 6279  
UNICO MD: 410013107003200500021  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

126 SEP 2019

CSA EJPMs

DOCTORA: LINA TATIANA MILLAN HUOTO  
MEDICINA Y NTE SUONABLE DESPACHA  
CON EL FIN DE PRESTAR SU COLABORACIÓN  
15 USUARIOS: YU FUI NOTIFICADO EL DIA  
18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Y EN SU DESHITO  
DISEÑAR ASI

215 USUARIOS: NECESITO DE YU PARA FAVOR  
ME CO LABOREN CON UN ABogado DE LA  
DEFENSA YU YU YU YU YU YU YU YU  
MAY ECONOMICAMENTE.

AT: YU YU YU YU YU YU YU YU YU  
CC: 12127648 TH 21656  
GARCIA ESPINOZA DE SU PALMIA  
VALIOSOS PRESTA PATI (5)

*Apr. N.º 27*

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL**



**JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA**

Palmira, Valle del Cauca, primero (1º) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Procede la judicatura a resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor Agente del Ministerio Público contra la providencia interlocutoria número 1747 del 22 de agosto de 2019, mediante la cual se le otorgó al penado YUBER BURBANO QUINAYA, recluso en el EPAMSCAS de Palmira, la libertad condicional.

**ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES**

**YUBER BURBANO QUINAYA**, identificado con cédula de ciudadanía número **12.123.648** expedida en Neiva, Huila, fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva, Huila, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2006, al haber sido hallado penalmente responsable, a título de coautor, del delito de **Secuestro Extorsivo Agravado**, a la pena principal de **TREINTA Y UN (31) AÑOS DE PRISIÓN** y multa de **dieciséis mil doscientos cincuenta (16.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes**, así como a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de veinte (20) años, negándosele la suspensión condicional de la ejecución de la pena; asimismo, fue condenado al pago de perjuicios morales por valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes<sup>1</sup>; fallo que fue confirmado por la Sala Tercera de Decisión Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Huila, mediante providencia del 2 de abril de 2008.<sup>2</sup> Asimismo, la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, resolvió el 5 de agosto de

<sup>1</sup> Ver folios 6 a 59 del cuaderno 1

<sup>2</sup> Ver folios 60 a 84 del cuaderno 1



2009, inadmitir la demanda interpuesta por la defensa del convicto YUBER BURBANO QUINAYA, por lo cual cobró ejecutoria el mismo día.<sup>3</sup>

La Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, resolvió el 5 de agosto de 2009, inadmitir la demanda interpuesta por la defensa del convicto YUBER BURBANO QUINAYAS, por lo cual cobró ejecutoria el mismo día.<sup>4</sup>

El pasado 22 de agosto de 2019, el estrado en cabeza de la Doctora CONSTANZA GRAJALES GONZÁLEZ, quien venía fungiendo como Juez encargada ante el disfrute de dos periodos de vacaciones del suscrito, mediante providencia interlocutoria número 1747 del 22 de agosto de 2019, le otorgó al penado YUBER BURBANO QUINAYA, la *libertad condicional*, bajo caución de 1 s.m.l.m.v.; decisión contra la cual el señor Agente del Ministerio Público, dentro del término legal, interpuso recurso de reposición, arguyendo haber incurrido el estrado en un error al otorgar el beneficio penal no obstante el delito por el cual fue sentenciado YUBER BURBANO QUINAYA, está expresamente excluido de este beneficio, prohibición legal contenida en la Ley 733 de 2002, norma vigente para la fecha de los hechos.

Por su parte el penado solicita la exoneración del pago de la caución impuesta al habersele otorgado la libertad condicional.

Definido lo anterior, corresponde al estrado decidir si el castigado es derecho al aludido mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena.

Da cuenta la actuación que los hechos que dieron origen a la investigación y posterior juzgamiento contra el aquí penado, tuvieron ocurrencia el día 6 de julio de 2004 (Folio 85, cuaderno 1); siendo que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva, Huila, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2006, al haber sido hallado penalmente responsable, a título de coautor, del delito de **Secuestro Extorsivo Agravado**; negándose la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

---

<sup>3</sup> Ver folios 85 a 119 del cuaderno 1

<sup>4</sup> Ver folios 85 a 119 del cuaderno 1

Difundido lo anterior, necesario es anunciar que la Ley 733 de 2002, entró a regir a partir del 31 de enero de 2002; normativa que consagraba en el artículo 11, la exclusión de beneficios y subrogados cuando, entre otros, se trataba del delito de *secuestro extorsivo*, por el cual fue declarado penalmente responsable YUBER BURBANO QUINAYA; norma que no fue derogado tácitamente por el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011, pues este fenómeno jurídico sólo acontece cuando, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y 72 del Código Civil,<sup>5</sup> la "disposición" nueva no es conciliable con la anterior, lo cual realmente no ocurrió en ese caso, de acuerdo con el precedente judicial trazado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutela, radicado 58927 del 20 de marzo de 2012.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria declaró que la exclusión de beneficios y mecanismos sustitutivos prevista en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, norma a la cual se subsumió la cita de la Ley 733 de 2002; no fue derogada, por corresponder a un estatuto especial (*radicados STP6880-2014 del 29 de mayo de 2014 y, STP9571-2014 del 22 de julio de 2014, entre otros*).

Así las cosas, basada el estrado en lo aquí razonado, declarará que el penado no es derecho a ningún beneficio administrativo, como tampoco a ningún mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena, por haber sido declarado culpable, entre otros, del delito de *secuestro extorsivo*; conducta punible ésta que por expresa prohibición legal (*artículos 11 de la Ley 733 de 2002 y, 26 de la Ley 1121 de 2006*) hace inviable su concesión."

Así las cosas, no podrá ser otra la decisión que la de revocar la providencia interlocutoria número 1747 del 22 de agosto de 2019, como lo establecen los artículos

---

<sup>5</sup> Código Civil. Artículo 71. "La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.

"Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.

"Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.

"La derogación de una ley puede ser total o parcial".

Artículo 72. "La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley". -Resaltado y subrayado fuera de texto-

457 del Código Procedimiento Penal y lo ordena el artículo 139 ibídem, deberá decretarse la nulidad del referido auto; pues lo cierto es que para dicho momento en que se profirió el auto en mención operaba en contra del penado YUBER BURBANO QUINAYA, la expresa prohibición legal contendía en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002; razón por la cual se abstendrá el despacho de pronunciarse respecto de la exoneración del pago de caución.

Conforme el precedente anunciado por la Corte Suprema de Justicia en el Radicado N° 34099, auto AP642-2017, aprobado según acta número 28, del siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017), contra esta decisión se podrán interponer los recursos ordinarios de reposición y apelación.

Por lo expuesto el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, Valle del Cauca, en ejercicio de sus atribuciones legales,

#### RESUELVE

**PRIMERO.** Reponer para revocar el auto interlocutorio número 1747 del 22 de agosto de 2019, mediante el cual se había otorgado la *libertad condicional* al penado **YUBER BURBANO QUINAYA**, identificado con cédula de ciudadanía número **12.123.648** expedida en Neiva, Huila; declarando la nulidad de lo allí decidido; conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.

**SEGUNDO.** Contra la presente decisión procederán los recursos ordinarios de reposición y apelación.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EL JUEZ,

  
**JAIRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ**

Radicación 41001 31 07 003 2005 00021 00 (N.I. 6279)  
Sentenciado **Yuber Burbano Quinaya**  
A.I. 2.008

**NOTIFICACIÓN.** En la fecha notifico personalmente el contenido del presente Interlocutorio a las partes, quienes enterados firman.

**JHON EDISON JARAMILLO MARÍN**  
Procurador Judicial

**PERSONALMENTE FECHA**

**ESTADO FECHA**

**YUBER BURBANO QUINAYA**  
Condenado

**PERSONALMENTE FECHA**

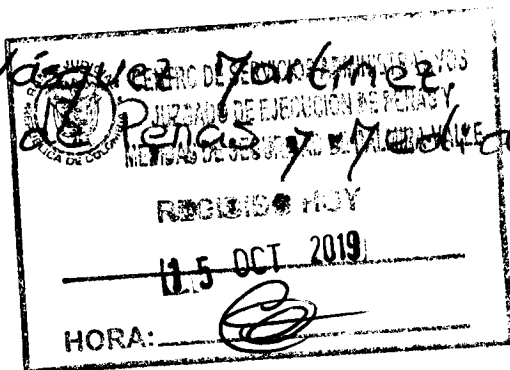
\_\_\_\_\_  
Defensor (a)

**PERSONALMENTE FECHA**

**CLAUDIA JIMENA CHAMORRO RAMÍREZ**  
Secretaria Centro de Servicios Administrativos

Octubre 10 de 2019 Palmira Valle.

Señor Juez: Jairo de Jesús Vázquez Martínez  
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira.  
E. S. H. D



Referencia: Proceso en etapa de ejecución

Asunto: interposición y sustentación de recurso de reposición con subcidio de apelación contra el Auto interlocutorio N° 2008.

Radicado: 41001310700320050002100 (N. 16279)

Condenado: Yuber Burbano Quinaya.

Cordial Saludo:

Yuber Burbano Quinaya identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, amparado en los artículos 29 y 229 de la Constitución Nacional y de acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia mediante radicado N° 34099, auto AP642-2017 presento recurso de reposición con subcidio de apelación contra el Auto interlocutorio N° 2.008 del primero de octubre de 2019 proferido por su señoría donde se me revoco el auto interlocutorio número 1742 del 22 de agosto de 2019 el cual paso a sustentar de la siguiente manera:

Primero: Ye encuentro descontando pena priva-

tiva de la libertad de 31 años de prisión por la Conducta punible de secuestro extorsivo agravado a título de Coautor, cuya pena la vigila su Señoría en la actualidad.

Segundo: Por cumplir los requisitos tanto objetivos como subjetivos que demandan el artículo 64 de la ley 599 de 2000 modificado por la ley 1709 de 2014 solicité el subrogado penal de la libertad condicional, la cual fue acompañada con toda la documentación que establece el artículo 271 del C.P.P con concepto favorable de la dirección del penal donde estoy recluso, cuya petición mediante auto interlocutorio n.º 1747 del 22 de agosto de 2019 fue despachada favorablemente a mi favor bajo pago de fianza o caución de tres salarios mínimos vigentes mensuales, manifestando, que no obtuve la libertad física en esa oportunidad por no contar con los recursos económicos para pagar la caución.

Tercero: El agente del ministerio público presentó recurso de reposición contra el auto que me había concedido la libertad condicional argumentando la expresa prohibición que establecía el artículo 11 de la ley 733 de 2002 y artículo 26 de la ley 1121 de 2006 lo cual llevó al señor juez de ejecución de penas a revocar el auto que en su momento me concedió mi libertad.

Sobre la Sustentación del recurso:

Como ya lo enuncie en la parte motiva de ésta, su Señoría me niego la libertad condicional en el auto interlocutorio 2.008 al revocar el A.I 1747 del 22 de agosto de 2019 bajo argumentos del señor agente del ministerio público; empero, al revisar los argumentos y la parte motiva del A.I 2.008 sólo encuentro lo siguiente: (...) "Dilucidado lo anterior, necesario es anunciar que la ley 733 de 2002, entró a regir a partir del 31 de enero de 2002, normativa que consagraba en el artículo 11, la exclusión de beneficios y subrogados cuando, entre otros, se trataba del delito de secuestro extorsivo, por el cual fue declarado penalmente responsable YUBER BURDANO QUINAYA; norma que no fue derogada tácitamente por el artículo 25 de la ley 1453 de 2011, pues ese fenómeno jurídico sólo acontece cuando, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y 72 del código civil, la "disposición" nueva no es conciliable con la anterior, lo cual realmente no ocurrió en ese caso, de acuerdo con el precedente judicial trazado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, sala de decisión de tutela, radicado 58927 del 20 de marzo de 2012."

"Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley 1709 de 2014, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria declaró que la exclusión de beneficios y mecanismos sustitutivos prevista en el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, norma a la cual se subsumió

la cita de la ley 733 de 2002, -(es de 2002) no fue derogada, por corresponder a un estatuto especial (radicados STP 6880-2014 del 29 de mayo de 2014 y, STP 9571-2014 del 22 de julio de 2014, entre otros)."

"Así las cosas, basada en el estrado en lo aquí razonado, declarará que el penado no es derecho a ningún beneficio administrativo, como tampoco a ningún mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena, por haber sido declarado culpable, entre otros, del delito de secuestro extorsivo. Conducta punible esta que por expresa prohibición legal (artículos 11 de la ley 733 de 2002 y, 26 de la ley 1121 de 2006) hace inviable su concesión".  
(Comillas fuera de texto original)

El señor juez de ejecución de penas acogiendo el llamado del agente del ministerio público bajo este pobre y contradictorio argumento de derecho me revocó la libertad condicional, y digo pobre y contradictorio argumentos en derecho porque textualmente transcribi el soporte y los fundamentos jurídicos adoptados en el Auto interlocutorio N° 2.008 y no encuentro el soporte ni las fundamentaciones razonables que den lugar tan siquiera a la controversia por las siguientes argumentaciones que jurisprudencialmente y en derecho voy a presentar.

El señor juez de ejecución de penas en su argu-



mentación manifestó que el artículo 25 de la ley 1453 de 2011 no había derogado tácitamente el artículo 11 de la ley 733 de 2002, textualmente dijo: (...) "norma que no fue derogada tácitamente por el artículo 25 de la ley 1453 de 2011." Es ahí, donde el señor juez se equivoca porque quien deroga tácitamente el artículo 11 de la ley 733 de 2002 fue el artículo 5 de la ley 890 de 2004 y no el 25 de la ley 1453 de 2011. Veamos porque:

Derogatoria del artículo 11 de la ley 733 de 2002.

El artículo 11 de la ley 733 de 2002 prohibió de manera general los beneficios administrativos y judiciales cuando se trate de determinados delitos de conocimiento de los jueces especializados.

Posteriormente el artículo 11 de la ley 733 de 2002 fue derogado tácitamente por el artículo 5° de la ley 890 de 2004, al no establecer prohibición alguna para acceder a los subrogados o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Situación jurídica que no solo se mantuvo con la expedición de la ley 906 de 2004, que introdujo el sistema penal acusatorio, sino que tomó mayor sentido en la medida que el legislador previó la posibilidad de que los preacuerdos suscritos con la fiscalía pueden versar, no sólo sobre la pena, sino también sobre sus consecuencias, como es el caso de los beneficios judiciales y administrativos.

El artículo 11 de la ley 133 del 2002, dictaba al amparo de los códigos penal y de procedimientos penal del 2000, estableció una serie de prohibiciones para los procesados por delito de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo y extorsión, quienes no pueden disfrutar de rebajas de pena, por sentencia anticipada y confesión, suspensión condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional, prisión domiciliaria, ni ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, excepto los beneficios por

"I. Vigencia del artículo 11 de la ley 133 del 2002

do, expreso:

En este sentido, se han pronunciado diferentes autoridades judiciales y administrativas. Es así como la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación del 14 de marzo de 2006, bajo la ponencia del Magistrado Alvaro Orlandi Pérez Pinzón, la cual me permito transcribir en extenso, dada la claridad de su contenido, expreso:

Esta norma, además, debe ser aplicada incluso a las personas condenadas con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, en virtud del principio de irretroactividad. Lo anterior nos lleva a concluir que las personas condenadas con anterioridad a la ley 890 de 2004, también tendrían derecho a gozar de la libertad condicional y demás beneficios judiciales y administrativos, sin atender al delito por el cual fueron juzgados.

colaboración previstos en el estatuto procesal.

De esta manera, se modificaron parcialmente los artículos 38, 62 y 64 del código penal y 40, 283, 357 párrafo, 480, 481 y 494 del código de procedimiento penal, en el sentido de entender incluida la prohibición en cada uno de ~~los~~ textos.

La posterior expedición de las leyes 890 y 906 del 2004, reformatoria del código penal la primera y abrogatoria del código de procedimiento penal la segunda, para juzgar las conductas cometidas después del 1° de enero de 2005, introdujo algunos cambios en la norma de exclusión o suprimió algunas instituciones y adoptó otras, lo que obliga a estudiar la vigencia de cada una de las prohibiciones contenidas en la reseñada ley 733 frente a los nuevos estatutos y, particularmente, al sistema procesal adoptado a partir del acto legislativo 03 del 2002, desarrollado por las ya citadas leyes del 2004.

No se trata, como lo dijo la corte en la sentencia del 25 de agosto del 2005, radicado 21.954, de un simple cambio de código sino de una transcendental variación del sistema, diseñado para que a través de las negociaciones y acuerdos se finiquiten los procesos penales, siendo esta alternativa la que en mayor porcentaje resolverá los conflictos, obviamente sin desconocer los derechos de las víctimas y de los terceros afectados con la comisión de la con-

ducta punible, partes que en este esquema reco-  
bran un mayor protagonismo dentro del marco  
de justicia restaurativa.

(...) La radical transformación del sistema pro-  
cesal introdujo obviamente sustanciales cambios  
en todo el ordenamiento penal, porque también la  
interpretación de las normas que no han tenido  
variación en sí mismas tendría que hacerse consi-  
derando el conjunto dentro del que se hayan inser-  
tas, como lo enseña el artículo 30 del código ci-  
vil, al disponer que "el contexto de la ley se sigue"  
para ilustrar el sentido de cada una de sus partes,  
de manera que haya, entre todas ellas la debida  
correspondencia y armonía"

(...) En efecto, una norma de carácter general co-  
mo el artículo 64 de la ley 599 de 2000, por virtud  
del artículo 11 de la ley 133 de 2002, no limi-  
ta sus alcances, en el sentido que a partir  
de la vigencia de esta última disposición ha-  
cia adelante, los condenados por la comisión de  
delitos de extorsión, no tendrían derecho a la  
libertad condicional, así cumplieran las tres  
quintas partes de la pena y muy a pesar de  
que su conducta en el establecimiento carcelar  
no fuese ejemplar como consecuencia de las bon-  
dades relativas de la prevención especial y la  
reeducación.

De esta manera, es evidente que el artículo 64 de  
la ley 599 de 2000 y 11 de la ley 133 de 2002,  
conforman en materia de libertad condicio-

nal la proposición jurídica completa. En efecto, las dos disposiciones regulaban de manera integral la materia y por tanto, al disponer el artículo 5º de la ley 890 de 2004, que la libertad condicional procede para todos los delitos, derogó en conjunto las disposiciones anteriores.

Ello significa que a partir de la expedición de la ley 890 de 2004, vigente a partir del 1 de enero de 2005, los requisitos, para aquellos condenados que antes estaban excluidos de la posibilidad de acceder a la libertad condicional por la naturaleza del delito que ejecutaron, ahora la tienen, siempre que se cumplan y se superen las exigencias normativamente previstas, esto es, (...)

Es claro que si la voluntad legislativa hubiese sido la de mantener la prohibición, la habría incluido en el texto de ese inciso o en cualquiera otra norma del nuevo estatuto procesal, de manera que no hacerlo equivale a derogarla tácitamente.

La sala estima conveniente destacar ahora esta última tesis que apunta a la necesidad de una afirmación legislativa inequívoca respecto de las prohibiciones del artículo 11, para precisar justamente que esa exigencia, apenas mencionada en la sentencia de tutela transcrita, es la consecuencia obvia de la profunda transformación que se ha producido en el ordena-

miento con la adopción de la institución de los preacuerdos, acuerdos y negociaciones.

(...) lo dicho cobra más fuerza frente al subrogado, si se advierte que la institución fue regulada en los artículos 774 y 775 de la ley 906 del 2004 y no se reprodujo la cláusula de exclusión de la ley 733 del 2002."

De la misma forma, el artículo 11 de la ley 733 de 2002, determinó en particular la exclusión del beneficio administrativo de hasta 72 horas, entre otros beneficios y subrogados, cuando se tratara de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, y conexos, norma que fue derogada tácitamente por el artículo 5º de la ley 890 de 2004, derogatoria que se hizo extensiva a la prohibición contemplada en el artículo 11, según se puede colegir de la sentencia de casación proferida por la sala penal de la honorable corte suprema de justicia el 14 de mayo de 2006, dentro del expediente N° 24.052, en la cual en lo pertinente señaló que:

"lo dicho implica que para examinar la vigencia de las prohibiciones consagradas en el artículo 11 de la ley 733 de 2002, puede optarse por una de estas vías: i) confrontar las modificaciones concretas que ha sufrido el instituto correspondiente, en razón de normas posteriores o, ii) gracias a una labor hermenéutica que aprecie en su integridad el sistema penal, verificar si la prohibición

respecto de una determinada figura puede entenderse insubsistente.

La primera tarea ya fue abordada por la corte a propósito de la libertad condicional y de la redención de pena por trabajo o estudio (sentencia de tutela del 7 de diciembre de 2005, radicado 23.322, y del 7 de febrero del 2006, radicado 24.136), para concluir que en esos aspectos el artículo 11 había sido derogado tácitamente."  
(ver sentencia constitucional T-692 de 2006)

Se dijo en las últimas de las mencionadas providencias que:

"Con posterioridad a esa norma se expidieron las leyes 890 y 906 de 2004, en las que se incluyeron disposiciones que aluden a los mismos institutos mencionados en el artículo 11 pero sin establecer las prohibiciones que en él se señalan, lo cual implica su tácita derogatoria, como ya lo había dicho la corte en sentencia del 7 de diciembre de 2005, radicado 23.322, si bien referido únicamente a la libertad condicional.

(Resaltado entre crochet fuera de texto)

Como se acaba de destacar, el artículo 5º de la ley 890 de 2004 derogó tácitamente el artículo 6º de la ley 599 de 2000, modificado por la ley 733 de 2002, en lo que tiene que ver con los presupuestos relacionados con la libertad condi-

cional, de manera que por virtud del principio de favorabilidad es aplicable el artículo 5º de la primera ley, en tanto genera mayores posibilidades de acceder a la libertad condicional, las cuales no se pueden rehusar con argumentos de competencia, que en nada inciden tratándose de una reforma eminentemente sustancial.

"En síntesis, las prohibiciones contenidas en el artículo 11 de la ley 733 del 2002 no son aplicables a los delitos de secuestro, extorsión, secuestro extorsivo, terrorismo y conexos cometidos a partir del 1º de enero del 2005 en los distritos en los que rige a plenitud la ley 906 del 2004."

Concretamente en mi caso en particular es exigible descontar las tres quintas  $\frac{3}{5}$  partes de la pena para acceder al subrogado penal de la libertad condicional, toda vez que en virtud de los principios de legalidad y de favorabilidad, no es procedente aplicar la preceptiva del artículo 26 de la ley 1125 de 2006, por cuanto la citada prohibición solo es dable hacerla efectiva a los autores de los delitos enlistados en ésta que hayan sido cometidos con posterioridad a su vigencia, la cual comenzó a regir el 29 de diciembre de 2006. Como puede verse dentro de mi proceso los hechos por los cuales fui condenado tuvieron ocurrencia el día 6 de julio de 2004 y yo fui capturado el 17 de enero del 2005, es decir, cuando aún expedida la ley 1125 de 2006 yo ya me



encontraba detenido, lo cual por mandato del artículo 29 de la Constitución nacional dicha norma no puede ser aplicada en mi contra.

En el caso que pongo a consideración del despacho a través de éste recurso de ley, es imperativo hacer prevalecer los principios de favorabilidad y de legalidad (art. 29 C.N), teniendo en cuenta que los hechos que dieron origen al fallo condenatorio sucedieron en julio de 2004 y en esas circunstancias no es procedente aplicarle la prohibición consagrada en el artículo 26 de la ley 1121 de 2006.

Frente a la aplicación de la ley más favorable el tratadista Fernando Velásquez Velásquez ha enseñado en su obra, Manual del derecho Penal, Parte general, que: "Pero, ¿cómo se sabe cuál es la ley más benéfica en cada caso? Al respecto, no puede emitirse reglas abstractas, pues ello se debe resolver en concreto comparando, en cada uno de las situaciones de la vida real, los resultados que pueda generar la aplicación de las diferentes normas; por ello es aconsejable bosquejar hipotéticas soluciones del caso particular para terminar acogiendo la más correcta y favorable al reo"

De igual manera, el artículo 43 de la ley 153 de 1887 establece que la ley preexistente prevalece a la ley ex-post-facto en materia penal, destacando que nadie podrá ser juzgado

do o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio.

Por otro lado, sobre la exclusión de los beneficios y subrogados penales de que trata el artículo 68 A de la ley 599 de 2006 modificado por el artículo 32 de la ley 1709 de 2014, manifiesto a su señoría que el mismo artículo 68 A modificado por el ya citado artículo 32 en el párrafo 1 establece lo siguiente:

Parágrafo 1º "Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 del este código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 386 del presente código."

Ello indica, que tampoco las exclusiones contempladas en el artículo 68 A modificado por el artículo 32 de la ley 1709 de 2014 puede ser aplicada en mi contra por expresa prohibición del parágrafo 1º del mismo artículo dado a que esa fue la voluntad del legislador.

Por lo anteriormente expuesto dentro de éste recurso y por mandato del artículo 29 de la C.N me respetuosamente solicito al señor juez de ejecución de penas encargado de la vigilancia de mi pena lo siguiente:


## Peticiones concretas.

Sirvaca revocar el auto interlocutorio N° 2.008 del 1° de octubre de 2019 y, como consecuencia de lo anterior, sirvaca nuevamente decretar a mi favor la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de la ley 599 de 2000 modificado por el art. 30 de la ley 1709 de 2014.

De igual forma solicito que al momento de decretar mi libertad condicional se me conceda la insolvencia económica.

En caso contrario, sirvaca remitir el expediente adjunto al recurso para que el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resuelva el recurso de apelación.

Ante el señor juez con mucho respeto.

  
mtf. Yuber Burbano Quinaya.  
C.C. 12.123.648  
TD 21656  
Patio # 5  
EPAMSCAS Palmira.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



**JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA**

Palmira, Valle del Cauca, veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020).

Procede la judicatura a resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor Agente del Ministerio Público contra la providencia interlocutoria número 2.008 del 1º de octubre de 2019, mediante la cual se le negó al penado YUBER BURBANO QUINAYA, recluso en el EPAMSCAS de Palmira, la libertad condicional.

**ANTECEDENTES**

**YUBER BURBANO QUINAYA**, identificado con cédula de ciudadanía número **12.123.648** expedida en Neiva, Huila, fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva, Huila, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2006, al haber sido hallado penalmente responsable, a título de coautor, del delito de **Secuestro Extorsivo Agravado**, a la pena principal de **TREINTA Y UN (31) AÑOS DE PRISIÓN** y multa de **dieciséis mil doscientos cincuenta (16.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes**, así como a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de veinte (20) años, negándosele la suspensión condicional de la ejecución de la pena; asimismo, fue condenado al pago de perjuicios morales por valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes<sup>1</sup>; fallo que fue confirmado por la Sala Tercera de Decisión Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Huila, mediante providencia del 2 de abril de 2008.<sup>2</sup> Asimismo, la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, resolvió el 5 de agosto de 2009, inadmitir la demanda

---

<sup>1</sup> Ver folios 6 a 59 del cuaderno 1

<sup>2</sup> Ver folios 60 a 84 del cuaderno 1

interpuesta por la defensa del convicto YUBER BURBANO QUINAYA, por lo cual cobró ejecutoria el mismo día.<sup>3</sup>

La Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, resolvió el 5 de agosto de 2009, inadmitir la demanda interpuesta por la defensa del convicto YUBER BURBANO QUINAYAS, por lo cual cobró ejecutoria el mismo día.<sup>4</sup>

Para el día 22 de agosto de 2019, el estrado entonces en cabeza de la Doctora CONSTANZA GRAJALES GONZÁLEZ, quien venía fungiendo como Juez encargada ante el disfrute de dos periodos de vacaciones del suscrito, mediante providencia interlocutoria número 1747 del 22 de agosto de 2019, le otorgó al penado YUBER BURBANO QUINAYA, la *libertad condicional*, bajo caución de 1 s.m.l.m.v.; decisión contra la cual el señor Agente del Ministerio Público, dentro del término legal, interpuso recurso de reposición, arguyendo haber incurrido el estrado en un error al otorgar el beneficio penal no obstante el delito por el cual fue sentenciado YUBER BURBANO QUINAYA, está expresamente excluido de este beneficio, prohibición legal contenida en la Ley 733 de 2002, norma vigente para la fecha de los hechos; por lo cual, mediante providencia interlocutoria número 2.008 del 1º de octubre de 2019, se revocó esa decisión se negó el beneficio penal.

Fue pasado a despacho el proceso con escrito del penado mediante el cual interpone recurso de apelación contra la providencia interlocutoria número 2.008 del 1º de octubre de 2019 y subsidiariamente el de apelación.

### CONSIDERACIONES

En extenso escrito presentado por el recurrente y recibido por el Centro de Servicios el 15 de octubre de 2019, el cual fue solo pasado a despacho por secretaria el día 03 de enero de 2020, habiéndose dejado diferentes constancias por parte de la Secretaria por la mora en el trámite de notificación de la providencia recurrida, escrito el cual se divide en dos partes, la primera de ellas por el penado recurrente a relacionar o prácticamente a repetir lo manifestado en la providencia recurrida, y en la segunda parte del escrito,

<sup>3</sup> Ver folios 85 a 119 del cuaderno 1

<sup>4</sup> Ver folios 85 a 119 del cuaderno 1

procede a manifestar las razones por la cuales en su entender no resulta procedente afirmar como lo afirma el despacho, que en virtud del delito por el cual fue condenado que corresponde a secuestro extorsivo agravado, no puede aplicarse la prohibición legal contenida en el artículo 11 de la ley 733 de 2002, ya que en su entender, al haberse cometido el delito por el cual fue condenado en fecha 06 de julio de 2004, es decir, posterior a la vigencia de la ley 733 de 2002, la cual empezó a regir el 31 de enero del año en mención.

Habiendo tenido en cuenta que también la mencionada ley se subsumió en lo previsto del art. 26 de la ley 1121 de 2006, entiende entonces el recurrente que aquí debe operar el principio de favorabilidad, que no puede serle aplicada el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, ya que en su entender, el artículo 11 de la ley 733 de 2002, que excluía estos benéficos fue derogada.

Es criterio de este estrado judicial como ya lo expuso en el auto recurrido, que el artículo 11 de la ley 733 de 2002 se encontraba vigente para el momento en que el penado ejecutó el delito por el cual fue condenado, y que el artículo 11 de tal decreto consagraba en forma directa la exclusión del beneficio de libertad condicional para este tipo de delitos; que el artículo 11 de la ley 733 de 2002 continuó vigente hasta la expedición de la ley 1121 de 2006, dicha ley en su artículo 26, reprodujo las prohibiciones legales que contenían el artículo 11 de la ley 733 de 2002, entre ellas precisamente la de otorgar el beneficio de libertad condicional a las personas que hubiesen sido condenadas por delitos como el de secuestro extorsivo agravado que corresponde al ejecutado por el condenado.

De manera tal, que en lo concerniente a este beneficio en manera alguna la prohibición legal ya señalada ha sido derogada desde el momento en que entró a regir el artículo 11 de la ley 733 de 2002, es decir a partir del 31 de enero de 2002, de allí que el alegato presentado por el recurrente no resulta tener asidero jurídico legal alguno, ya que los artículos mencionados de las normas citadas han venido consagrandose desde el 31 de enero de 2002, en norma ininterrumpida, la prohibición a la que se ha hecho referencia, de forma tal que no existe posibilidad alguna de realizar cualquier tipo de estudio a fin de establecer si en verdad es posible aplicar el principio de favorabilidad ya que no hay

ninguna norma más favorable al penado que pueda ser constatada o enfrentada y que a la vez le haya sido impuesta al penado, pues sencillamente desde antes que ejecutara la conducta existía una prohibición legal, la cual aún existe, sin que haya habido vacío jurídico en relación a esta prohibición o un lapso de tiempo en que esta no haya regido desde el año 2002, por lo cual, si el delito se efectuó desde el año 2004, siempre estuvo tal conducta regida por la prohibición, que ya tantas veces se ha anotado, siendo pues improcedente que se alegue que ha habido una derogatoria de estas normas como lo pretende el penado, especialmente en lo que tiene que ver con las prohibiciones legales a que ya este estrado se ha referido.

Asimismo sostiene el penado que en virtud de no encontrarse el delito por el cual fue condenado dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 68A del Código penal Ley 599 de 2000, ello indicaría sencilla y llanamente que esta disposición no podría servir de argumento para negarle este beneficio.

En tal sentido le asiste la razón al recurrente ya que no se puede invocar la norma relaciona para negar el benéfico solicitado, este despacho de ninguna manera ha invocado tal norma para negar este beneficio pero si se pude aclarar que la redacción de dicha norma sirve de fundamento para afianzar la tesis de este estrado en el sentido de precisar que el legislador al hacer este tipo de excepciones de manera alguna está derogando otras normas anteriores que tenga otras excepciones, ya que no existe ninguna técnica legislativa ni disposición legal ni jurisprudencial que determine que en materia de derecho penal o de procedimiento pernal, la última norma que expide el Congreso y que contenga determinadas prohibiciones siempre derogará a la norma anterior que tenga otro tipo de prohibiciones frente a otras conducta punibles; dicho de otro modo, no puede pretenderse que no razón a que el Legislador consagre prohibiciones frente al otorgamiento de beneficio en determinados delitos deba concluir de allí que si existen otras prohibiciones anteriores frente a otros delitos esas propinaciones anteriores deban considerarse derogadas ya que el legislador lo que ha hecho no es otra cosa que consagrar periódicamente prohibiciones de beneficios frente a determinados delitos y al transcurrir del tiempo cree necesario construir nuevas excepciones frente a otros delitos y así lo consagra en normas posteriores, y si lo

considera conveniente y pertinente en otro momento histórico y con el objetivo de impedir la comisión de otros delitos podría muy bien crear otros listado en que incluya nuevos delitos para prohibir frente a estos el otorgamiento de determinados beneficios, sin que pueda entenderse que cada listado de estos contenidos en las normas posteriores va derogando las anteriores, en esos caso sería absolutamente necesario que el legislador así lo manifestara en forma directa, no opera aquí la derogación tacita ya que para ello es necesario que existan dos normas que se contradigan y que para la existencia de la posterior sea necesario excluir de la vida jurídica la anterior o que se imposible aplicar la norma posterior sin entender derogada la norma anterior; por diferentes y múltiples razón de orden lógico, material o practico. En el caso presten nada impide de que subsista la prohibición consagrada en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, aunque existan otras prohibiciones posteriores para el otorgamiento de beneficios penales y/o administrativos y que en nada se contradicen las distintas normas que consagran este tipo de prohibiciones, ello se hace evidente si se observa que cada vez que se decretan estas normas se incluyen delitos diferentes, inclusive con la connotación que estos delitos que se incluyen resultan ser de poca monta frente a las prohibiciones que se han consagrado en normas anteriores frente a delitos de gran calado o impacto social. Obsérvese como en el artículo 68A del Código Penal con la modificación del artículo 32 de la ley 1709 de 2014, se incluyeron delitos que por su penalización se pueden considerar de poca monta, pero sí de gran impacto social como es: la "violencia intrafamiliar, el "Hurto calificado", como es "La receptación" la "Instigación a delinquir"; la "Falsificación" de moneda nacional" y "la evasión Fiscal".

Es claro entonces que la prohibición legal contendida en la Ley 733 de 2002 se mantiene aún vigente pues no ha habido norma expresa que la derogue y esa es la razón por la cual deba seguirse aplicando.

Argumento que el estrado considera válido y suficiente para que la negativa del beneficio penal se mantenga, sin que se pueda hacer eco de las manifestaciones del penado; por cuanto no se han desconocidos las normas vigentes y aplicables al caso concreto. Por tanto el estrado mantendrá incólume la decisión y en consecuencia a la no reposición, se dispone la remisión del expediente ante el sentenciador, para que esa autoridad judicial conozca del recurso de apelación interpuesto como subsidiario por el penado.



Por lo expuesto el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, Valle del Cauca, en ejercicio de sus atribuciones legales,

### **RESUELVE**

**PRIMERO.** No reponer el auto interlocutorio número 2.008 del 1º de octubre de 2019; por las razones expuestas en la parte considerativa.

**SEGUNDO.** Conceder el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del penado contra el auto interlocutorio 2.008 del 1º de octubre de 2019, en el efecto suspensivo, para ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva, Huila; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley 906 de 2004 (modificado por la regla 90 de la Ley 1395 de 2010) y, 478 de la Ley 906 de 2004.

**TERCERO.** Contra la presente decisión no procede recurso.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**EL JUEZ,**

**JAIRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ**



**NOTIFICACIÓN.** En la fecha notifico personalmente el contenido del presente Interlocutorio a las partes, quienes enterados firman.

**JHON EDISON JARAMILLO MARÍN**  
Procurador Judicial

<b>PERSONALMENTE FECHA</b>  _____ <b>ESTADO FECHA</b>
--

**YUBER BURBANO QUINAYA**  
Condenado

<b>PERSONALMENTE FECHA</b>  _____
---

\_\_\_\_\_  
Apoderado (a)

<b>PERSONALMENTE FECHA</b>  _____
---

**CLAUDIA JIMENA CHAMORRO RAMÍREZ**  
Secretaria Centro de Servicios Administrativos

Por lo expuesto el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, Valle del Cauca, en ejercicio de sus atribuciones legales,

### **RESUELVE**

**PRIMERO.** No reponer el auto interlocutorio número 2.008 del 1º de octubre de 2019; por las razones expuestas en la parte considerativa.

**SEGUNDO.** Conceder el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del penado contra el auto interlocutorio 2.008 del 1º de octubre de 2019, en el efecto suspensivo, para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley 906 de 2004 (modificado por la regla 90 de la Ley 1395 de 2010) y, 478 de la Ley 906 de 2004.



**TERCERO.** Contra la presente decisión no procede recurso.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**EL JUEZ,**

**JAIRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ**



 <b>JUSTICIA PENAL BUGA</b> Código:GSP-FT-21	<b>OFICIO</b>	
Código:GSP-FT-21	Versión: 1	Fecha de aprobación: 15/02/2012

48346

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA  
SECRETARÍA SALA PENAL**

Guadalajara de Buga, Valle, 9 de marzo de 2020  
Consecutivo : P-001

Señor  
**YUBER BURBANO QUINAYAS**  
Interno – TD 21656  
EPMSC “Villa de las Palmas”  
Carrera 23 vía al ICA  
Palmira – Valle del Cauca

Ref. NOTIFICACIÓN DE DECISIÓN - SEGUNDA  
INSTANCIA – LEY 600/2000  
Radicado: 41001-31-07-003-2005-00021-05/P-002-20  
Procesado: YUBER BURBANO QUINAYAS  
Delito: SECUESTRO EXTORSIVO  
M. P.: LUIS FERNANDO CASAS MIRANDA



Cordial saludo.

Para su notificación, remito copia de auto interlocutorio aprobado mediante Acta No. 59 del 04/03/2020 proferido en el proceso de la referencia, mediante el cual se resolvió recurso de apelación.

Se anexa lo enunciado, en 3 folios.

Atentamente,

**FERNANDO AFANADOR VACA**  
Secretario

 <b>JUSTICIA PENAL</b> <b>BUGA</b>	<b>AUTO INTERLOCUTORIO</b> <b>SEGUNDA INSTANCIA</b>	 <b>ERES</b> <small>ESTRATEGIA ÉTICA Y SOCIAL</small>
<b>Código:</b> GSP-FT-09	<b>Versión:</b> 2	<b>Fecha de aprobación:</b> 22/05/2012

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA**  
**SALA DE DECISIÓN PENAL**

Magistrado Ponente: **LUIS FERNANDO CASAS MIRANDA**

Radicación: 41001-31-07-003-2005-00021-05 (P-002-20)  
Condenado: YUBER BURBANO QUINAYAS  
Delitos: SECUESTRO EXTORSIVO

Aprobado según **Acta No. 59**, en Guadalajara de Buga, cuatro (04) de marzo dos mil veinte (2020)

**OBJETO DE LA DECISION**

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el condenado Yuber Burbano Quinayas contra el auto No 2.008 de 1 de octubre de 2019, que resolvió reponer para revocar el auto interlocutorio número 1747 del 22 de agosto de 2019, mediante el cual se le había otorgado la libertad condicional al penado.

**HECHOS**

Los hechos por los que fue condenado Yuber Burbano Quinayas fueron detallados por la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Neiva, así:

*"(...) De acuerdo con el material probatorio, tenemos que para la tarde del pasado 06 de julio de 2004, la joven Luz Adriana Rubiano García, salió de su casa de habitación familiar con su novio y primo Diego Andrés García Vargas, hasta el estadero denominado "limón y menta", donde se dispusieron a ver el partido de futbol de la selección Colombia. En ese sitio arrimaron varios de los indagados [entre ellos Yuber Burbano Quinayas], quienes previamente habían acordado secuestrar a la mencionada ciudadana. Por ello, luego de departir algunas cervezas, se canceló la cuenta y la invitaron hasta el sector rural de Camppalegre, como parte del plan que habían*

Sin embargo, como quiera que los hechos objeto de reproche penal, se remontan al 6 de julio de 2004, y que, entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de noviembre de 2006, sobrevino un interregno, en que la prohibición de concesión de subrogados para quienes fueron condenados por el delito de secuestro extorsivo no se encontraba vigente; a juicio del agente del Ministerio Público, Yuber Quinayas podría acceder al subrogado de la libertad condicional, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el original artículo 5 de la ley 890 de 2004, donde se exige como requisito objetivo el cumplimiento de las 2/3 partes de la pena; tiempo que a la fecha no cumple.

6. A través de auto No 2008 de 1 de octubre de 2019, el titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, resolvió revocar la concesión de la libertad condicional a Burbano Quinayas, considerando que *"el penado no es derecho a ningún beneficio administrativo, como tampoco a ningún mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena, por haber sido declarado culpable, entre otros, del delito de secuestro extorsivo"*.

7. El condenado interpuso recurso de apelación sin ninguna argumentación adicional.

### **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

**1. Competencia.** Esta Sala resulta competente para conocer del asunto, conforme lo previsto en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000, por tratarse de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de este Distrito Judicial.

#### **2. Cuestión Previa.**

Considerando que el artículo 26 de la ley 1121 de 2006 excluye de la concesión de beneficios, subrogados penales y mecanismos sustitutivos a quienes sean condenados por los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, resultaría improcedente, bajo el amparo del artículo 64 de la ley 599 de 2000, modificado por el artículo 30 de la ley 1709 de 2014, conceder a Yuber Burbano Quinayas el subrogado de la libertad condicional.

Sin embargo, dado que los hechos que motivaron la condena fueron cometidos el 6 de julio de 2004 y que desde el 01 de enero de 2005

para tener derecho a la libertad condicional] y por ello la Sala procederá a confirmar la providencia impugnada.

Sin que sean necesarias más consideraciones, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en Sala de decisión Penal,

### **RESUELVE**

**CONFIRMAR** el auto No 2.008 de 1 de octubre de 2019, que resolvió reponer para revocar el auto interlocutorio número 1747 del 22 de agosto de 2019, mediante el cual se le había otorgado la libertad condicional al penado.

Contra esta providencia no procede ningún recurso. Devuélvanse las diligencias al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira.

### **NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,**

Los Magistrados,



**LUIS FERNANDO CASAS MIRANDA**

41001-31-07-003-2005-00021-05 (P-002-20)



**ÁLVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO**

41001-31-07-003-2005-00021-05 (P-002-20)



**JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ**

41001-31-07-003-2005-00021-05 (P-002-20)